

LA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN PARTIDARIA EN ARGENTINA*

Juan Carlos Torre (Universidad Torcuato Di Tella)

INTRODUCCIÓN

Con el fin del régimen autoritario en 1983 los partidos políticos ocuparon el centro de la vida política en Argentina y se vieron rodeados del fervor y la confianza de los ciudadanos. Una evidencia fue el impresionante caudal de nuevos afiliados, que hacia el mes de marzo de ese año sumaban 2.966.472 según datos oficiales. Transcurridos 20 años desde entonces, ese fervor y esa confianza se han trocado en un extendido cuestionamiento, condensado en la consigna “Que se vayan todos!”, detrás de la cual se movilizaron recientemente grupos importantes y significativos de la ciudadanía.. Las críticas no apuntan, empero, hacia la democracia, que sigue reteniendo el respaldo de la mayoría de la opinión ciudadana; más bien se dirigen al desempeño de los partidos. En la brecha abierta entre lo que los ciudadanos valoran y, por lo tanto, demandan y los comportamientos efectivos de los partidos ha cobrado forma la crisis de la representación partidaria. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de ella en Argentina?

Para responder a esta cuestión nos proponemos en estas notas explorar los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria. Anticipando la conclusión señalemos en cuanto a sus alcances que dicha crisis tiene una envergadura diferente entre las distintas familias políticas del país. Más concretamente, su impacto es relativamente más limitado en la principal de ellas, el peronismo. Las dificultades que hoy exhibe el peronismo se refieren más a su cohesión interna como maquinaria política que a la salud de los vínculos con el electorado que representa. Con respecto a su naturaleza, creemos que la crisis de la representación partidaria expresa la vitalidad de las expectativas

* Agradezco los comentarios y sugerencias de Ana María Mustapic, Carla Carrizo, Vicente Palermo y Luis Alberto Romero

democráticas. En otras palabras, no estamos ante un fenómeno de resignada desafección política. El clima de cuestionamiento que rodea a los partidos indica en verdad la distancia entre lo que la oferta partidaria ofrece y las mayores y plurales exigencias de sectores importantes de la ciudadanía, en particular, el electorado independiente de centro-izquierda y de centro-derecha.

Como paso previo al examen de las cuestiones que tenemos planteadas, a continuación trazaremos a grandes rasgos la trayectoria de la democracia de partidos, desde su auspicioso comienzo hasta la actual crisis de la representación partidaria. Para ello, seguiremos la pista que proveen las vicisitudes electorales de las fuerzas políticas.

LA DINAMICA ELECTORAL DE LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS

En las primeras elecciones después del colapso del autoritarismo, realizadas en 1983, los dos mayores partidos nacionales, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), entraron en la competencia para dirimir sus aspiraciones rivales en el marco de reglas de juego compartidas. La institucionalización del conflicto político puso fin a largos años de política facciosa y creó las bases institucionales para la transición hacia la democracia de partidos.

El formato bipartidista de la confrontación electoral reactualizó en un clima político bien diferente la línea divisoria que hacia 1945 había partido en dos el mapa político argentino: el polo peronista y el polo no peronista. Cuando surgió a mediados de los años cuarenta, el movimiento político liderado por Perón produjo un reordenamiento de la base social de los alineamientos partidarios que tuvo un efecto duradero sobre el perfil electoral de la política. Formada en muy corto plazo y desde el vértice del poder estatal, la coalición electoral que llevó a Perón a la presidencia en 1946 capturó votos a lo largo de todo el espectro partidario: votos socialistas, votos radicales, votos conservadores. La característica sobresaliente del flujo de votos a Perón fue la de provenir de los estratos populares, esto es, trabajadores urbanos sindicalizados o no que votaban al socialismo pero también al radicalismo y los sectores bajos y medios bajos de las provincias del interior que votaban a conservadores y radicales. En breve, el peronismo le sustrajo el

séquito popular a los demás partidos. Por su parte, el polo no peronista se nutrió de las clases medias y altas y se distribuyó, principalmente, entre tres ofertas partidarias, en primer lugar, la UCR y luego agrupaciones de centro-derecha y de izquierda.

Según la descripción propuesta por Mora y Araujo (1991) los distintos segmentos de la pirámide social que confluyeron en el voto peronista establecieron una línea divisoria en términos electorales. Por debajo de ella, el voto es mayoritariamente peronista; por encima, es, en general, un voto en favor de una variedad de partidos pero ninguno de ellos peronista. En el panorama así delineado, el equilibrio de la política electoral descansó sobre dos factores. El primero, la dificultad de los partidos no peronistas para traspasar la línea divisoria y conseguir apoyos por debajo de ella. El segundo factor fueron los obstáculos que encontraron dichos partidos para conformar coaliciones abarcativas por encima de la línea divisoria, aglutinando al conjunto del electorado no peronista. En esas condiciones y en las ocasiones en que pudo expresarse con libertad el movimiento peronista ratificó su predominio en las elecciones.

Las elecciones de 1983 alteraron ese estado de cosas con un resultado que implicó toda una innovación política: la refutación de la “ley de hierro” de la política argentina según la cual el peronismo era imbatible en elecciones libres. Con el liderazgo de Raúl Alfonsín y el 51,7 % de los votos, la UCR conquistó la presidencia, imponiéndose al peronismo encolumnado bajo la sigla de Partido Justicialista, que recibió el 40,1% de los sufragios. A la victoria de la UCR contribuyó, en primer lugar, la emigración en su favor de un porcentaje pequeño pero decisivo de votos tradicionalmente peronistas, reclutados entre los sectores altos de la población asalariada, obreros especializados y empleados de cuello y corbata. El traslado de votos a través de la línea divisoria desde abajo hacia arriba se articuló con el aporte de un segundo fenómeno. Nos referimos a la superación de la falta de cohesión del voto no peronista por medio del respaldo a la candidatura de Alfonsín de votos de clases medias y altas con simpatías de centro-derecha y de izquierda. La fuerte polarización de las elecciones y la memoria del trágico fin del último gobierno peronista (1973-1976) contribuyeron, sin duda, al novedoso realineamiento de los apoyos partidarios.

El patrón de competencia bipartidista que exhibieron las elecciones de 1983 no se mantuvo, empero, a lo largo del tiempo. Progresivamente, la concentración de votos en torno de la UCR y el PJ fue disminuyendo, según se observa en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Concentración del voto (UCR + PJ)

Año	Elección Presidencial	Elecciones Legislativas
1983	91,9%	85,9%
1985		77,8%
1987		78,7%
1989	79,7%	73,0%
1991		69,3%
1993		68,9%
1995	67,0%	64,8%

Esa tendencia al debilitamiento del bipartidismo no operó en las dos direcciones por igual. En verdad, el motor del cambio fue la merma del respaldo electoral a la UCR. Tal es la conclusión que se desprende del Cuadro 2, elaborado a partir de elecciones legislativas que, por llevarse a cabo con un sistema proporcional, reflejan mejor las preferencias electorales.

Cuadro 2. Variación del caudal electoral UCR y PJ

Año	UCR	PJ
1983	100 = 48,0%	100 = 38,5%
1985	90,1	89,2
1987	77,6	107,8
1989	59,9	116,1
1991	60,5	104,5
1993	63,0	110,4
1995	45,3	111,9

Porcentajes sobre votos positivos, 1983=100.

La pérdida progresiva de votos de la UCR contrasta con la mayor fidelidad del electorado del PJ. Una primera evidencia ya estaba presente en las propias elecciones de 1983 (Mustapic: 2002). En ellas, todos los cargos electivos en los tres niveles, nacional, provincial y local, se renovaron en forma simultanea y por medio de boletas separadas. Estas circunstancias permitieron la manifestación de comportamientos diversos en el electorado. En el polo no peronista, los votantes discriminaron sus preferencias según las candidaturas en disputa; en el polo peronista ocurrió, mas bien, lo contrario.

Por ejemplo, en la Capital Federal, la UCR obtuvo 15 puntos porcentuales más en la elección presidencial que en la de diputados, concretamente, el 64% para presidente y el 49% para diputados. En cambio, la diferencia del voto al justicialismo fue tan sólo de 3 puntos, 27% para presidente y 24% para diputados. En la provincia de Catamarca, los resultados electorales fueron los siguientes: UCR, 47% para presidente, 42% para diputados y 36% para gobernador; el PJ obtuvo, en el mismo orden, 44%, 42% y 40%. Los datos de la provincia de Salta mostraron ser aún más dispares con respecto al radicalismo: 45% para presidente, 41% para diputados y sólo 25% para gobernador. A su vez, el PJ recibió el 45% tanto para presidente como para diputados y alcanzó el 51% en las elecciones de gobernador. Contrastes similares se registraron en otros distritos electorales, poniendo de manifiesto la mayor consistencia del voto peronista y la naturaleza mas plural y diferenciada del voto dentro del polo no peronista. Las consecuencias de esos atributos del electorado no peronista habrían de desplegarse, plenamente, en las elecciones sucesivas.

Los análisis electorales (De Riz-Adrogué: 1991; De Riz: 1998; Adrogué: 1995) han mostrado que a partir de 1983 la UCR fue devolviendo votos hacia el centro-derecha y hacia el centro izquierda del espectro electoral, favoreciendo el crecimiento de terceras fuerzas. En la oferta partidaria del centro-derecha se contó, inicialmente, con varios partidos distritales, con base en las provincias, y con la Unión de Centro Democrática (UCeDe), la agrupación fundada por el patriarca del neoliberalismo argentino, Alvaro Alsogaray. En el centro-izquierda se destacó, principalmente, en un comienzo, el Partido

Intransigente (PI), con fuertes vínculos en el movimiento de los derechos humanos. Luego de coincidir en el respaldo a la candidatura presidencial de Alfonsín, ambos segmentos políticos retomaron su autonomía e hicieron sus propias opciones, imprimiéndole con su voto fluctuante un carácter abierto a la competencia electoral.

Siguiendo el itinerario de sus expresiones más dinámicas tenemos, en primer lugar, al PI cuya lista de diputados consiguió 411.883 sufragios en 1983 (2,8%); luego recibió un numeroso contingente de ex votantes de Alfonsín y llegó a representar en los comicios legislativos de 1985, con 930.839 votos, el 7,7% del electorado. Dos años más tarde, en 1987, su caudal electoral descendió abruptamente a 327.103 votos (2,0%). Este descenso coincidió con una novedad de importancia en la oferta partidaria: la reconstrucción del PJ como fuerza competitiva, después de la crisis interna provocada por la derrota en 1983. Con un nuevo elenco dirigente y credenciales más pluralistas, el peronismo recuperó sus electores tradicionales y atrajo otros nuevos, triunfando en las elecciones de 1987. La confluencia del PI se hizo explícita en 1989 cuando llamó a votar por el candidato del PJ a la presidencia, Carlos Menem, y perder desde entonces presencia electoral.

En segundo lugar y hacia el centro derecha, la UCeDe experimentó, asimismo, una evolución ascendente: sus casi 500.000 votos de 1985 (3,2%), se convirtieron en 929.695 en 1987 (5,8%) al ofrecer al electorado de talante político conservador y pro mercado en el terreno económico, una oferta partidaria para sus preferencias. Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1989, la perspectiva de un triunfo de Menem, con sus consignas populistas, acercó el apoyo de partidos provinciales al candidato de la UCR, Eduardo Angeloz. La UCeDe optó, en cambio, por presentarse en forma independiente, dividiendo el voto de centro-derecha: Alsogaray, candidato a presidente, sumó 1.200.368 votos, un 7,2%, y la lista de diputados de la Alianza de Centro, articulada por UCeDe, recibió 1.549.649 sufragios que, con el 9,9% de los votos positivos, alcanzó su mejor desempeño electoral.

Frente a las dificultades de la administración radical en la gestión de los dos problemas centrales del primer tramo de la transición –el ajuste de cuentas con el pasado por la

violación de los derechos humanos y la gestión de la emergencia económica que siguió a la crisis de la deuda externa- el triunfo de Menem con 7.953.301 votos (47,5%) no constituyó una sorpresa. Sí lo fue, en cambio, su giro ideológico y político una vez en la presidencia hacia las reformas de mercado y el mundo de los negocios. Previsiblemente, el viraje de Menem condujo a una recomposición de los alineamientos de centro-derecha y de centro-izquierda. En cuanto al primero, promovió un movimiento de aproximación al PJ: el líder de la UCeDe, Alsogaray, fue invitado a desempeñarse como asesor de la presidencia y se incorporó a la nueva coalición de gobierno en compañía con otros cuadros partidarios. Con el tiempo, su propio electorado siguió el mismo camino. Cruzando la clásica línea divisoria de la política electoral, esta vez desde arriba hacia abajo, reorientó sus preferencias a las listas electorales del peronismo. Los efectos de esta transferencia de votos se hicieron visibles en la sistemática reducción de los apoyos a la UCeDe en su principal bastión electoral, la Capital Federal: el 22% alcanzado en 1989 cayó al 8,6% en 1991 y al 3% en 1993.

Mientras este sector del electorado emprendía el camino de ida al peronismo, desde el centro-izquierda se iniciaba otro, pero en una dirección contraria. En 1991, en disidencia con el viraje de Menem, un pequeño número de diputados del PJ pasó a la oposición y formó la agrupación Frente Grande que, en las elecciones legislativas de ese año, dio sus primeros pasos con el 1,5% de los votos. Las esperanzas puestas en la deserción de las bases populares del PJ no se materializaron; en los hechos, la disidencia del Frente Grande encontró mayor eco entre las clases medias genéricamente identificadas con la izquierda democrática y de regreso de su reciente atracción por el peronismo. Con esos apoyos, en 1993 logró el 2,5% de los votos en los comicios legislativos. Apenas un año después se produjo su gran avance cuando Menem y Alfonsín acordaron, en el Pacto de Olivos, la reforma de la Constitución que habilitó la vía para la reelección del líder justicialista. El malestar provocado por la abdicación en su papel de oposición entre los simpatizantes del radicalismo, se tradujo en un fuerte flujo de votantes hacia el Frente Grande en las elecciones de constituyentes de 1994; entonces, la flamante agrupación alcanzó el 12,7% de votos en el nivel nacional, y con el 37,6% se convirtió en la primera fuerza en la Capital Federal. La culminación en el crecimiento propio del centro-

izquierda ocurrió en las elecciones presidenciales de 1995, ahora bajo la sigla de Frepaso, por la suma de nuevas agrupaciones. Con una campaña centrada sobre cuestiones de fuerte sesgo moral e institucional, sus candidatos, Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez, fueron votados por el 28,2% del electorado, relegando a un pobre tercer lugar a los candidatos de la UCR, con 16,4%; entre tanto, Menem fue reelecto con el 47,7% de los votos.

Dos fueron los corolarios de las fluctuaciones del voto en este segundo tramo de la democracia de partidos. El primero, la transformación del Frepaso en una ascendente fuerza opositora. El segundo, el cambio en la composición de la coalición electoral que hizo posible la reelección de Menem (Gervasoni: 1998). Entre 1989 y 1995, el líder justicialista consiguió mantener la mayoría de los votos leales del peronismo; al mismo tiempo compensó con sus ganancias en el electorado de centro-derecha la pérdida de sus apoyos originales entre los votantes de centro-izquierda.

El escenario de la competencia interpartidaria que definía hasta entonces la fragmentación de la oposición y el predominio del PJ habría de modificarse en 1997. Poco antes de las elecciones legislativas de ese año, la UCR y el Frepaso decidieron sumar fuerzas y formaron la Alianza. El debut de la Alianza puso de manifiesto su potencial competitivo, frente a un gobierno desgastado tras ocho años en el poder y los niveles de desempleo, desigualdad de ingresos y corrupción que confinaban a un segundo plano sus logros en materia de estabilidad y modernización de la economía. La nueva coalición electoral alcanzó el 45,6 de los votos, nueve puntos por encima del 36,2% del PJ.

La unidad de los partidos de oposición no condensó, sin embargo, todo el proceso político que puso fin a las cinco victorias consecutivas del peronismo (1987,1989, 1991, 1993, 1995). Otro componente de dicho proceso fue el desgranamiento de la coalición electoral de Menem. En 1996 y por un conflicto de intereses políticos, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el artífice del Plan de Convertibilidad, abandonó el gobierno. Poco después ocupó el espacio de centro-derecha vacante desde la declinación

de la UCeDe, creando una nueva formación partidaria, Acción por la República (APR). En 1997 APR se sumó a la oposición y canalizó el descontento de fracciones de este electorado con las prácticas políticas, antes que con la orientación económica, del gobierno de Menem, obteniendo 657.514 (3,9%) votos.

Las tendencias en la distribución de las preferencias electorales en 1997 se realizaron, efectivamente, en las elecciones presidenciales de 1999. En ellas, los candidatos de la Alianza, Fernando de la Rúa por la UCR y Carlos “Chacho” Álvarez por el Frepaso, resultaron victoriosos con 9.167.404 (48,4%) votos, superando a los 7.254.147 (38,3%) de la fórmula del PJ, mientras APR, postulando a Cavallo a la presidencia, logró 1.937.565 (10,2%) votos. Es de destacar que el PJ concurrió a la disputa presidencial sin apoyos externos significativos, como ocurriera en 1983. También, como en 1983, sufrió la deserción de franjas de su electorado, lo que se tradujo en su peor resultado electoral desde entonces, a pesar de que su candidato, Eduardo Duhalde, volviera sobre las tradicionales consignas peronistas y criticara las políticas de liberalización económica de Menem. Ello no facilitó, por cierto, la convergencia con el centro-derecha que tan instrumental había sido al predominio del peronismo. Allí adonde ésta pudo mantenerse, la fortuna del PJ cambió de signo. En el distrito estratégico de la provincia de Buenos Aires, el candidato peronista a la gobernación con el 37,4% de los votos, logró prevalecer sobre su rival de la Alianza (41,4%), gracias a que pudo sumar el respaldo concertado de los votantes de UCeDe (5%) y APR (5,8%).

La hipótesis que hemos querido justificar a través de este recorrido, sin duda esquemático, por las vicisitudes electorales de las fuerzas políticas, es la siguiente: la dinámica de la competencia en la política electoral nacional entre 1983 y 1999 se explica, fundamentalmente, por el comportamiento del polo no peronista y dentro de él por las opciones electorales del centro-derecha y del centro-izquierda. Es allí donde está la fuente principal de la volatilidad del voto y también de los cambios en las coaliciones electorales. Como procuraremos mostrar a continuación, es allí donde está localizado, asimismo, el epicentro de la crisis de la representación partidaria.

EL PERONISMO TODAVIA SOBREVIVE EN MEDIO DE LA CRISIS.

La crisis de la representación partidaria tuvo su manifestación más elocuente en las elecciones legislativas llevadas a cabo en octubre de 2001. En ellas, el porcentaje hasta entonces nunca alcanzado por los votos nulos, los votos en blanco y la tasa de abstención han sido vistos por los observadores de la política argentina como la expresión del rechazo de los ciudadanos a los partidos y el prólogo de la crisis que en diciembre de 2001 condujo a la terminación abrupta de la presidencia de Fernando de la Rúa, en medio del mayor aislamiento político y una ola de movilizaciones (Cheresky, 2002).

Recordando brevemente su contexto inmediato, destaquemos que el programa de la Alianza que llevó a de la Rúa a la presidencia en 1999 estuvo centrado en corregir los legados de la gestión del presidente peronista Carlos Menem durante los diez años previos: los costos sociales de las reformas de mercado, el estancamiento de la actividad económica, los reiterados abusos de poder y prácticas de corrupción. Transcurridos dos años en el gobierno, el balance de la Alianza no pudo ser más insatisfactorio frente a las expectativas que había suscitado: los niveles de pobreza y desempleo se mantenían altos, la reactivación de la economía no se produjo, los intentos por superar la emergencia trajeron consigo nuevos ajustes fiscales; finalmente, otro episodio clamoroso de corrupción sacudió las esferas oficiales y además no fue esclarecido (Novaro, 2002).

A todo ello se agregaron los conflictos dentro del núcleo gobernante, que provocaron la renuncia del vice-presidente, Carlos "Chacho" Álvarez, el líder del Frepaso, y el distanciamiento de de la Rúa de su propio partido, la UCR. El cuadro de situación con el que la Alianza arribó a su primer test electoral se completaba con la presencia de Domingo Cavallo, jefe del partido de centro-derecha, APR, a quien de la Rúa confió el Ministerio de Economía, luego de los fracasos iniciales de los responsables económicos de la coalición electoral de 1999.

El cuadro 3 muestra el impacto electoral del desempeño del gobierno de la Alianza.

Cuadro 3. Elecciones Legislativas 1999 y 2001 Comparación de resultados

	1999	2001	Variación
PJ	5.476.625	4.809.495	- 667.130
Alianza	7.590.034	3.058.569	- 4.531.465
Acción por la Rep.	1.374.675	174.068	- 1.200.607
ARI + Polo Social	-	1.616.104	+ 1.616.104
Izquierda	528.090	1.499.293	+ 971.203
Provinciales	1.355.503	1.200.118	- 155.385
Otros	1.050.646	1.737.549	+ 686.903
Votos en Blanco	819.384	1.704.514	+ 885.130
Votos Nulos	161.760	2.261.332	+ 2.099.572
Abstención	4.463.092	6.777.624	+ 2.314.532

Fuente: M. Escolar, E. Calvo et al (2002).

La comparación entre las elecciones legislativas de 1999 y 2001 permite observar, primero, el formidable revés electoral experimentado por las formaciones partidarias involucradas en la gestión del gobierno de de la Rúa. Con respecto a los votos obtenidos dos años antes, la Alianza de la UCR y el Frepaso perdió 4.531.465 votos, un 59,7%; entretanto, el partido del Ministro Cavallo, APR, perdió 1.200.675 votos, un 87%. En segundo lugar, los datos electorales indican que el Partido Justicialista vio disminuido su caudal electoral en 667.130 votos, esto es sólo un 12,2% por debajo de su nivel inmediato anterior. Combinando estas dos observaciones tenemos que la fidelidad del electorado peronista no fue significativamente afectada por el generalizado clima de protesta ciudadana, que arrasó prácticamente con la opción partidaria de centro-derecha y asestó un golpe letal sobre los apoyos electorales de la coalición gobernante.

A su vez, los análisis hechos por Marcelo Escolar y Ernesto Calvo sobre el origen partidario y el destino de los votos que fluctuaron entre ambas elecciones permiten, en tercer lugar, completar el perfil de los realineamientos partidarios ocurridos en 2001. De ellos se desprende que los votantes de APR, en ausencia de una oferta partidaria adonde canalizar sus preferencias, se volcaron masivamente al voto blanco y al voto nulo; esto es lo que hicieron un 74% de los que en 1999 habían votado por el partido de Cavallo. Por su parte, quienes retiraron su respaldo a los partidos de la Alianza también hicieron su

contribución al extraordinario crecimiento del voto negativo; la suma de votos nulos y votos en blanco con casi cuatro millones solo fue superada por los sufragios que recibió el PJ, el partido más votado¹. Los desertores del oficialismo, sin embargo, dirigieron su descontento en una proporción mayor hacia otros dos destinos: las pequeñas agrupaciones de la izquierda ideológica (troskistas, socialistas revolucionarios, comunistas), las cuales multiplicaron en un 200 % su magro valor máximo anterior; y hacia una nueva formación de centro-izquierda, Argentina por una República de Iguales, (ARI), creada en la víspera de las elecciones en nombre de la condena moral a los dirigentes políticos tradicionales. En razón de las opciones partidarias que escogieron para manifestar su disidencia, éstos fueron muy probablemente ex-votantes de Frepaso.

A la luz de los resultados de las elecciones de octubre de 2001 es posible avanzar una conclusión y una conjetura. La conclusión es que el repudio ciudadano que éstas pusieron de manifiesto no hizo impacto en todos los partidos por igual. Este fue comparativamente menor para el PJ; contra el telón de fondo del drástico encogimiento del electorado de partido, el peronismo logró sobrevivir todavía como fuerza política predominante. La conjetura se refiere a la transformación del desenlace electoral en una prueba del descrédito de los partidos políticos en su conjunto: quienes contribuyeron principalmente a fijar esa interpretación fueron, por un lado, el electorado de centro-derecha y, por otro, los disidentes por izquierda de la Alianza, los ex votantes del Frepaso. Mediante un voto negativo y un voto positivo altamente impugnador, unos y otros convirtieron su respectivo disconformismo con la oferta partidaria existente en el problema político de la crisis de la representación partidaria en Argentina.

¹ Entre 1983 y 1999, el voto nulo osciló entre el 0,5% y el 1,5% de los sufragios emitidos; el voto blanco a su vez lo hizo entre el 2% y el 4%. En 2001, el primero ascendió hasta el 12,5% y el segundo hasta el 9,4%. Entretanto, la tasa de abstención, que en el período 1983-1999 se ubicó en promedio entre el 15% y el 20%, en octubre de 2001 alcanzó el 27%.

EL MALESTAR CON LA REPRESENTACIÓN PARTIDARIA COMO PROBLEMA POLÍTICO.

Para explorar la naturaleza del problema político construido a partir del desenlace de las elecciones de 2001 comenzaremos introduciendo un argumento de carácter general. Las fallas en el rendimiento de los partidos, tal como pueden ser detectadas con la atención puesta en las políticas que promueven y en sus estilos de actuación, no conducen necesariamente a una crisis de representación; sólo crean sus condiciones de posibilidad. Más concretamente, no basta que sea posible reconocer en la realidad los resultados de un desempeño insatisfactorio, como son la persistencia o agudización del estancamiento económico, de los niveles de pobreza, de los episodios de corrupción. A fin que ese desempeño insatisfactorio ponga en marcha un proceso de desafección partidaria se requiere además que la brecha entre las expectativas y los resultados sea adjudicada a lo que han hecho o dejado de hacer los dirigentes partidarios en lugar de ser atribuida a la gravitación de fuerzas o factores fuera de su control. Que sea una u otra la interpretación que prevalezca dependerá, a su vez, de la perspectiva desde la cual los electores juzguen la gestión de los partidos y establezcan las responsabilidades. Al respecto, una distinción que importa es el tipo de vínculos que éstos mantienen con el partido.

En términos simples, la diferenciación relevante es la que separa de un lado a los adherentes y del otro a los simpatizantes. El vínculo de los primeros con el partido descansa sobre una relación de pertenencia cimentada en una prolongada identificación y una densa trama de solidaridades. Por su parte, los simpatizantes se vinculan en función de la proximidad de sus preferencias políticas con las propuestas del partido. Unos y otros se acercan, en consecuencia, con expectativas distintas, desde perspectivas diferentes, a la evaluación del desempeño de los partidos. Así, la identificación partidaria de los adherentes produce un recurso invaluable para las organizaciones, la lealtad. En cierto modo, la lealtad independiza el respaldo al partido de los resultados de sus políticas en el corto plazo. El segundo efecto de la identificación partidaria se hace visible en la formación de las claves interpretativas de la realidad. En particular, suministra un mecanismo para seleccionar la información que los adherentes procesan con respecto a la

actuación del partido y cuya eficacia radica en predisponer a éstos a hacer suyas las razones con las que los dirigentes explican sus aciertos y racionalizan sus dificultades (Mercado Gasca: 1997; Adrogué y Armesto: 2001)

A diferencia de lo que cabe esperar entre los adherentes, los simpatizantes mantienen con el partido un vínculo más laico porque teniendo preferencias políticas definidas no las asocian de manera estable con ninguna de las fuerzas políticas en competencia. En los comicios tenderán a escoger a aquella cuyas propuestas prometan la defensa de sus valores e intereses. Su respaldo tendrá, pues, un alcance específico, en función de la calidad de los resultados que ésta demuestre producir, y estará en contraste con el apoyo más general y difuso de los adherentes, que presupone una identificación más afectiva con la organización partidaria. Previsiblemente, cuando sus expectativas no son satisfechas la reacción natural será colocar en el banquillo de los acusados a los dirigentes del partido y retirarles el respaldo. Sus actitudes posteriores dependerán de la existencia de ofertas partidarias alternativas. En ausencia de ellas, la atribución de responsabilidades recaída inicialmente sobre unos dirigentes de partido en particular bien puede extenderse hasta incluir a la mayoría de ellos.

Precisamente, de acuerdo con el análisis de las elecciones de 2001 sabemos que éstos fueron comportamientos típicos entre los ex votantes del FREPASO y de Acción por la República. Para apreciar mejor su significación nos parece oportuno ponerlos en relación con dos reacciones opuestas frente a circunstancias objetivas semejantes, que ponen de manifiesto la productividad de las lealtades para amortiguar el efecto del desempeño de los partidos. La primera de ellas fue la del electorado del Partido Justicialista en ocasión de las elecciones de 1999, en las que estaba en juego la continuidad de la gestión peronista en el gobierno. En términos de indicadores sociales, económicos e institucionales, el tramo final de la presidencia de Menem no cerraba con un balance más positivo que el del gobierno de la Alianza al cabo de sus primeros dos años. Sin embargo, aún en su derrota, el Partido Justicialista logró en 1999 retener una alta proporción de su electorado histórico. La segunda reacción contrastante frente a un desempeño insatisfactorio es la que se desprende del examen de los votos recibidos por la Alianza en

octubre de 2001. Ya se ha señalado que éstos disminuyeron un 60 % en comparación con los obtenidos en 1999, lo que implica que no obstante el juicio predominantemente negativo sobre su gobierno el restante 40 % eligió respaldar a los candidatos de la Alianza. Carecemos de información sobre la composición de los 3.000.000 de electores que conformaron ese 40 %; empero, a la vista de la deserción del grueso de los votantes del Frepaso, es verosímil que entre los que mantuvieron su solidaridad hacia la coalición gobernante en momentos en que era ampliamente cuestionada haya sobresalido la presencia de los adherentes del radicalismo, el partido más antiguo y más institucionalizado de la Alianza.

La confrontación entre las reacciones opuestas recién evocadas permite concluir que el problema político de la crisis de la representación partidaria no es el correlato previsible de un bajo rendimiento objetivo de los partidos; más bien, es el fruto de la existencia de una masa de ciudadanos movilizada en torno de la fiscalización del desempeño de los dirigentes políticos y el cumplimiento de sus promesas electorales.

CIUDADANOS VERSUS CLASE POLITICA.

Al principio de estas notas sostuvimos que la crisis de la representación partidaria es una expresión de la vitalidad de expectativas democráticas². Más en general, el malestar con la representación constituye un síntoma de cambios operados en la cultura política de franjas significativas del electorado. Dichos cambios han puesto en circulación claves interpretativas que enmarcan la relación entre representantes y representados a partir de criterios nuevos, que redefinen como inmorales e injustos a comportamientos que eran previamente considerados en definitiva tolerables. Antes de ocuparnos de ellos trazaremos en forma sintética su genealogía en el marco de las transformaciones de la cultura política..

El disparador del cambio ha sido apropiadamente localizado en el movimiento por los derechos humanos que surgió en la última dictadura y ganó protagonismo con la

² Sobre esta cuestión, véase Miranda (2002)

transición a la democracia (Peruzzotti: 2002a). Al margen de sus resultados efectivos contra las secuelas del terrorismo de estado, la gravitación del movimiento se tradujo en una innovación cultural. Su crítica a una versión extrema de la arbitrariedad estatal proveyó los materiales para la construcción simbólica de una crítica más general a toda forma de ejercicio discrecional de los poderes públicos. Bajo esta inspiración y por el sendero abierto por el movimiento por los derechos humanos emergió una segunda ola de movimientos que colocaron sus demandas en términos de derechos y apelaron a una estrategia, el recurso al sistema judicial (Smulovitz: 1997). Diversos incidentes de violencia policial impulsaron las primeras movilizaciones de grupos de ciudadanos exigiendo justicia, con acciones destinadas a atraer la atención de los medios de comunicación. El efecto de demostración de estas iniciativas promovió otras y éstas a su vez la formación de organizaciones contra la represión policial. Con el paso del tiempo fue expandiéndose el repertorio de los derechos civiles cuyo desconocimiento o trasgresión servían de acicate a la proliferación de movimientos de ciudadanos (derechos del consumidor, protección del medio ambiente, defensa del género, etc.). Que el descubrimiento de las garantías constitucionales como argumento para legitimar demandas era el efecto de nuevas y más intensas preferencias lo hizo visible el hecho de que los reclamos legales no cesaran, aún cuando los tribunales optaran con frecuencia por tomar distancia bajo presiones políticas.

Estas experiencias, llevadas a cabo con independencia de las estructuras partidarias, alcanzaron una expresión singular respecto de las prácticas políticas convencionales en el país con la creación de asociaciones (Poder Ciudadano, Conciencia, Ciudadanos en Acción, entre otras) cuya actividad principal apunta al fomento de la participación cívica y al control de las acciones gubernamentales. Las campañas dirigidas a la protección de los derechos y la supervisión de la transparencia y legalidad de la actuación de las autoridades encontraron también en el desarrollo de un periodismo de investigación un actor importante, que sacó a luz casos flagrantes de abusos de poder y de corrupción política. La movilización de estas “minorías activas”, en particular durante la presidencia de Menem, que dio sobrados pretextos con la manipulación constante de las reglas y la sucesión de escándalos, terminó finalmente comportando, como destacara Enrique

Peruzzotti, una politización de la agenda pública ya no centrada en cuestiones distributivas sino en la vigencia de la ley y de la ética pública (Peruzzotti: 2002b).

En la trayectoria sumariamente descrita, desde un primer momento dominado por demandas en torno de los derechos civiles a un momento posterior, donde se sumaron las demandas centradas en las modalidades de ejercicio del gobierno, la lógica discursiva y práctica puesta en marcha por las novedades de la cultura política fue avanzando hasta conducir a la discusión del vínculo de la representación partidaria. A la visión del vínculo como una pura operación de autorización, sostenida por fuertes lazos de identidad entre representantes y representados, los movimientos de ciudadanos crearon las condiciones para una visión alternativa, basada en la demanda de la rendición de cuentas de los representantes de sus actos y sus promesas. La mayor relevancia que ganó la fiscalización en las relaciones de los ciudadanos con los partidos introdujo la desconfianza vigilante en el lugar de la vida política ocupado por las seguridades de la confianza solidaria. El cambio cultural consolidó, así, dándole razones y motivos, la presencia de un electorado más exigente y, por ello mismo, más informado y alerta acerca de las ofertas partidarias en la arena política. Fue en él, en fin, que encontraron su público natural las actividades de las asociaciones cívicas dedicadas a supervisar los funcionarios electos y las denuncias del periodismo de investigación.

Al tiempo que tenía lugar esta mutación en el vínculo de la representación partidaria entre franjas significativas de la ciudadanía, un desarrollo paralelo experimentaban los principales partidos: la reducción de su capacidad de dar dirección a las políticas públicas. Desde mediados de los ochenta, las decisiones de política pública fueron en gran medida fruto de respuestas a presiones de actores extra-gubernamentales y no de los programas elaborados por los partidos y con los cuales se presentaban ante los electores. El desenlace de la política de ajuste de cuentas con el pasado por la violación de los derechos humanos, el giro al principio moderado y luego más radicalizado hacia las reformas de mercado- los dos capítulos principales de la gestión de la democracia de partidos argentina- mostraron las dificultades de la UCR y el PJ para hacer sus propias opciones. En contraste, su capacidad de ocupación de las agencias del estado por medio

del poder de nómina sobre los cargos públicos no sufrió restricciones. Más bien, ese poder fue ejercido con creces y utilizado a fin de sostener los aparatos partidarios y ofrecer a los dirigentes oportunidades para financiar sus carreras políticas y el enriquecimiento personal. En estas condiciones, cuando la mirada inquisitiva de “las minorías activas” y de los medios de comunicación se proyectó sobre las organizaciones partidarias a la pregunta ¿para qué sirven los partidos? la respuesta que se dieron fue que, en verdad, los partidos se sirven en primer lugar a ellos mismos.

No fue, entonces, una sorpresa que en un país con sólidos clivajes partidarios éstos pasaran a un segundo plano y ganara preeminencia en el discurso público de finales de los noventa el término la *clase política*, para designar, suprimiendo las diferencias, a los hombres de partido. Dentro de esta categoría los incluidos eran típicamente los políticos peronistas y los políticos radicales. Esa ubicación no respondió apenas al hecho objetivo de que desempeñaran las principales responsabilidades en las instituciones de la democracia en su condición de miembros de los dos grandes partidos de alcance nacional. Allí quedaron ubicados por otra razón: la política de descrédito que explotó sus problemas para adaptarse a los nuevos vientos de la democracia argentina. La reluctancia a oxigenar sus filas frente a las denuncias de corrupción, el recurso al financiamiento de sus cuadros con fondos públicos, la concentración de sus esfuerzos a la propia reproducción política en las luchas por el poder dentro de las organizaciones, todo ello amplió la brecha con las nuevas exigencias ciudadanas. De hecho, peronistas y radicales, tanto en el gobierno como en la oposición, siguieron haciendo lo que siempre habían hecho. Pero ahora en un escenario donde los cambios de la cultura política convertían en intolerable lo que por mucho tiempo era considerado como el modo más normal de funcionamiento de una democracia de partidos.

LOS HUERFANOS DE LA POLITICA DE PARTIDOS.

La política de descrédito de la *clase política* tuvo por principales animadores a figuras (comunicadores sociales, líderes de opinión, dirigentes políticos) provenientes del área de centro-derecha y del área de centro-izquierda. Nos referimos a ellas en términos de áreas

para recortar el espacio ante todo de unos valores dominantes antes que de una estructuración partidaria estable. En ambas, los partidos se han sucedido unos a otros en el tiempo y no han sido siempre los medios para la canalización de las preferencias. Quienes las ocupan se reclutan en las clases medias y medias-altas de los grandes centros urbanos, tienen comparativamente un alto nivel de educación e información política, cuentan con un fluido acceso a los medios de comunicación y, finalmente, responden al perfil del votante independiente, esto es, son electores que creen en unos determinados valores y que al momento de votar se guían por ellos pero juzgan sin preconceptos cual de las organizaciones partidarias mejor los sostienen y defienden.

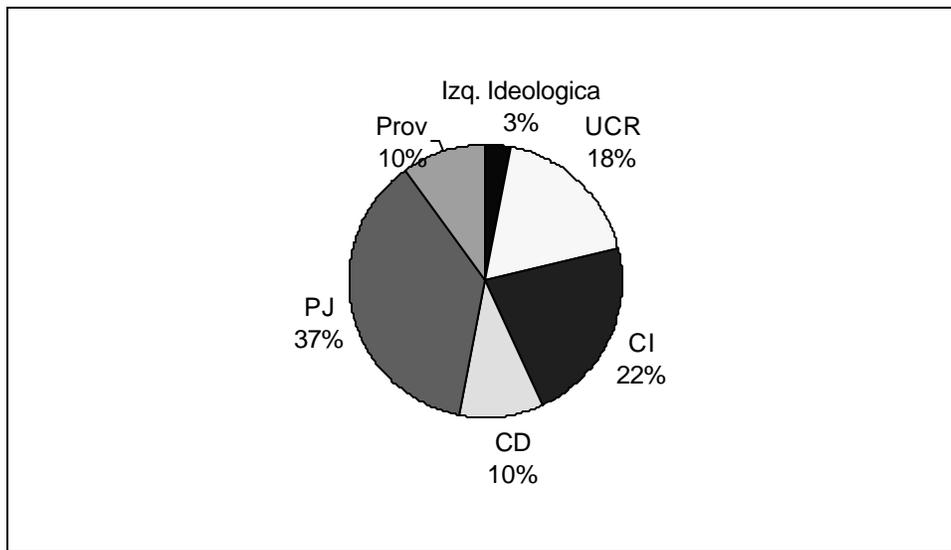
Su gravitación en la política argentina ha descansado en su poder de agenda y su influencia en el terreno electoral. En cuanto al primero, señalemos que en el área de centro-izquierda fue donde surgió el movimiento de los derechos humanos que definió las prioridades en el tramo inicial de la transición a la democracia. Después de su relativo eclipse, las consignas movilizadoras las encontró en las luchas contra la corrupción y los abusos de poder, en los valores de la transparencia y la legalidad. El área del centro-derecha colocó en la agenda pública los problemas fiscales, la estabilidad monetaria, las reformas de mercado, los valores de la propiedad privada y de la libertad económica. Unas y otras fueron las cuestiones que encuadraron el debate público y condicionaron los cursos de acción de los gobiernos de la UCR y del PJ.³

En cuanto a su influencia electoral, la volatilidad del votos de estas dos áreas del espectro ideológico definió asimismo la suerte en las urnas de los dos principales partidos. Para apreciar esa influencia destaquemos que la estabilidad del sistema partidario ha descansado hasta tiempos recientes en el núcleo duro de los adherentes del PJ y, en una proporción menor, los de la UCR. Los primeros han concentrado en promedio alrededor del 37 % de los votos positivos del electorado, sin que los cambios

³ La fortuna política de estos partidos radicó en haber contado con líderes que, actuando como *outsiders* respecto de sus tradiciones, se sintonizaron con esos climas de ideas y principios, reinventando la identidad de sus propias organizaciones y con ella, la dirección estratégica de sus respectivos gobiernos. Esa fue la experiencia de Raúl Alfonsín en su campaña a la presidencia en 1983 con la consigna del retorno al estado de derecho y el ajuste de cuentas con el pasado; también fue la de Carlos Menem con su viraje hacia el neoliberalismo una vez en la presidencia en 1989.

del peronismo desde el distribucionismo y el nacionalismo económico al neoliberalismo hayan alterado esas lealtades. Por su parte, los radicales han sumado cerca del 18 % pero en una pendiente hacia abajo desde su victoria en 1983. Si se ponen a un lado a los partidos provinciales por tener un peso limitado a sus distritos y a la izquierda ideológica debido a su escasa significación electoral, el fiel de la balanza en las elecciones está inclinado hacia las áreas de centro-derecha y de centro izquierda. Computando el caudal de votos máximos obtenidos por las agrupaciones políticas que expresaron a una y otra en elecciones legislativas donde concurrieron en forma independiente, tenemos que el centro-derecha reúne un 10-12 % de los votos y el centro-izquierda un 22 %.⁴ Como destacamos antes, en el período transcurrido entre 1983 y 1999 la oscilación de aproximadamente este tercio del electorado –en la misma dirección, en direcciones opuestas- decidió la derrota o la victoria de la UCR y el PJ en las elecciones presidenciales

Cuadro 4. Esquema de los apoyos electorales de las fuerzas políticas (1983-1999)



⁴ Estos porcentajes atribuidos al centro derecha (CD) corresponden al porcentaje obtenidos por la UCeDe y APR en las elecciones legislativas de 1989 y 1999 respectivamente. En el caso del centro izquierda (CI), resultan del porcentaje obtenido por el Frepaso en las elecciones legislativas de 1995.

Retomando el argumento, destaquemos que por vías distintas, los círculos de opinión tanto de centro-izquierda como de centro-derecha convergieron, a su turno, en la crítica a *la clase política*. Los primeros poniendo el acento en las relaciones colusivas de los principales partidos a espaldas del respeto a los mecanismos de la democracia; los segundos cuestionando su escasa sintonía con los consensos existentes en favor de la eficiencia de la gestión pública y la modernización de la economía. Para unos y otros la salida frente a este estado de cosas radicaba en la firmeza moral con respecto a la partidocracia tradicional y en la reforma de sus usos y costumbres políticas. Estas fueron las expectativas que abonaron el terreno para el surgimiento y desarrollo de las nuevas formaciones políticas y que hicieron de ellas, en particular, del Frepaso, la promesa de una renovación partidaria que cerrara la brecha de representación.

Su frustrante desempeño posterior durante el gobierno de la Alianza condujo a que se concentrara también sobre ellas el clima de impugnación que rodeaba a los políticos peronistas y radicales. En este contexto, la crítica de *la clase política* adquirió bien pronto el carácter de una verdadera cruzada moral, con sus excesos y simplificaciones (Palermo,2002). Se abrieron entonces las compuertas al negocio de las denuncias de corrupción montado por los medios, a la reactivación de la retórica anti-partido de largo arraigo en el país, en fin, a una suerte de exorcismo colectivo que atribuyó la causa de los problemas económicos y sociales a la responsabilidad de unos políticos venales e incompetentes y silenció la gravitación del poder de veto de los grupos de interés, de las restricciones económicas internacionales, de la complejidad de los dilemas de gobierno.

En las elecciones de octubre de 2001 la debacle de la Alianza (en particular, del Frepaso) y de Acción por la República puso en escena un irónico desenlace: cuanto había de novedoso en la cultura política del electorado terminó por penalizar sobre todo a las formaciones partidarias que mejor lo encarnaban. Estas eran, en verdad, formaciones partidarias vulnerables ya que no contaban con una reserva de lealtades que las blindara ante las consecuencias de su actuación en el gobierno. La construcción política tanto del Frepaso como de APR se había desenvuelto principalmente en la arena mediática y alrededor del discurso convocante de fuertes liderazgos personalistas. En cuanto tales,

ambos partidos eran expresivos de las modalidades de la representación propias de los movimientos políticos de opinión ciudadana. En ellos, los lazos de confianza que sostienen a los representantes son a la vez lábiles y exigentes y esto es así porque se nutren de la producción de resultados sobre cuestiones (*issues*) específicas en el corto plazo de frente a unos electores que evalúan autónomamente y sin ataduras su desempeño. Así las cosas, la onda expansiva del voto de protesta del 2001 condujo a la destrucción del segmento partidario ocupado por los sectores que han sido la principal fuente de innovación política en el país, ratificándolos en su condición de huérfanos de la política de partidos⁵.

. HACIA LA SEGUNDA TRANSICION .

Al cabo de 20 años de existencia, la trayectoria de la democracia de partidos en Argentina ha culminado en dos fenómenos contrapuestos. Por un lado, generó una masa crítica de ciudadanos y de activismo cívico que mantiene una actitud alerta y exigente sobre la actuación de los hombres de partido. Por el otro, la dinámica política impulsada por estas mayores expectativas democráticas ha contribuido a una crisis de la representación partidaria. Estamos, así, ante una paradoja: aquello que la crisis tiene de positivo para la expansión de la calidad de la democracia de partidos es también la causa de un impacto institucional negativo. Para estimar la magnitud de este impacto hay que introducir un dato adicional en la caracterización de la coyuntura actual. A diferencia de Perú y Venezuela, en el país la crisis de la representación partidaria no se resolvió en el colapso del sistema de partidos en su conjunto (Malamud: 2002). Con vistas a las próximas elecciones del 2003 los sondeos previos indican que los varios candidatos del PJ en disputa por la presidencia reúnen el caudal histórico del electorado peronista. El desenlace de la crisis ha sido, pues, un sistema de partidos desequilibrado.

⁵ Esta condición tuvo una resolución positiva, si bien efímera, en las experiencias de democracia directa a escala local bajo la forma de asambleas de vecinos reunidos en torno de la autogestión de sus necesidades inmediatas que proliferaron en los barrios de Buenos Aires durante la primera mitad de 2002, para ir luego decayendo.

En este escenario, lo que observamos actualmente son distintas iniciativas tendientes a re-equilibrar la oferta partidaria. El rumbo que éstas han tomado no comporta, en verdad, una novedad puesto que siguen los patrones históricos, esto es, apuntan a llenar una vez más los espacios del centro-derecha y del centro-izquierda, en cierto modo disponibles luego de los reveses experimentados por APR y el Frepaso. Tampoco las formas de construcción política son novedosas porque tienen por eje la gravitación de fuertes personalidades, que ganaron visibilidad recientemente y en un breve plazo por medio de intervenciones políticas de amplia resonancia.

En el centro-derecha, el articulador de la nueva oferta partidaria es Ricardo López Murphy, economista de formación ortodoxa de fugaz tránsito en la cartera de economía del gabinete de la Rúa, cargo que debió abandonar por las resistencias de la coalición gobernante a sus propuestas drásticas de ajuste fiscal. En el centro-izquierda, la figura convocante es Elisa Carrió, diputada de la Alianza, que tuvo un papel protagónico en la investigación sobre el lavado de dinero promovida por el Congreso para pasar luego a la oposición acusando a los hombres de partido de complicidad con las mafias del dinero y los poderes ocultos. El lanzamiento de estas iniciativas – las agrupaciones “Recrear para el Crecimiento” y “Argentina para una República de Iguales”, respectivamente- ha hecho reemerger dos órdenes de problemas que en el pasado obstaculizaron la estabilización y el posterior desarrollo de empresas políticas de igual signo.

Están, primero, los problemas que son específicos a cada una de ellas. Dentro del área de centro-derecha, el proceso de construcción de la oferta partidaria ha desembocado en forma recurrente ante una encrucijada: seguir invirtiendo recursos personales y materiales en consolidar una alternativa de poder institucional en el mediano y largo plazo o ceder a la tentación de influir en el corto plazo respondiendo a las solicitudes de gobiernos necesitados del respaldo de sus ideas y de sus intereses. En la disyuntiva, esta última opción probó ser más atractiva y fue escogida en detrimento de la otra; ocurrió con la UceDe y, más tarde, también con APR. El costo asociado a la estrategia de la influencia fue el debilitamiento de la identidad organizacional e inclusive la co-responsabilización de los resultados de gestiones de gobierno sobre cuya dirección política no estaban en

condiciones de gravitar. Adicionalmente, la disyuntiva sobre el camino a seguir también se coloca en términos individuales entre los simpatizantes de centro-derecha, donde la fuerza del prejuicio anti-partido torna más trabajosa la tarea de sumar voluntades a favor de una nueva oferta partidaria. Así, no pocos hombres y mujeres que podrían incorporarse a la empresa política, prefieren tomar distancia y canalizan sus esfuerzos a la formación de centros de estudios y equipos técnicos, declarándose disponibles a la colaboración con los poderes públicos de turno.

Con relación a los problemas característicos del centro-izquierda, éstos son la contracara de la crítica de la partidocracia, tan típica y movilizadora en este espacio del electorado. La aspiración a “otra política”, más ética y más transparente, no obstante ser una consigna eficaz de renovación política, encierra virtualmente efectos que conspiran contra su consolidación. Primero, porque suele estar acompañada de una natural desconfianza hacia las prácticas de la política institucional, como son la negociación y el intercambio entre las fuerzas políticas establecidas. Segundo, porque el rechazo de los vicios e inercias de los partidos tradicionales tiende a promover la baja institucionalización de las ofertas partidarias alternativas. Este formato introduce con frecuencia en ellas una fuente de inestabilidad ya que entroniza en el puesto de comando a los humores y cálculos individuales de dirigentes aglutinadores y, por ello mismo, dominantes.

Además de los problemas propios, las iniciativas en marcha en el centro-derecha y en el centro-izquierda, se confrontan a un problema compartido, el que pone el sistema electoral vigente a la expansión de nuevas fuerzas en el territorio nacional. En la experiencia reciente de los partidos que han buscado representar a estos segmentos del electorado es posible detectar una trayectoria similar: todos surgieron y crecieron en las zonas centrales –por su población y desarrollo- pero no consiguieron franquear esos límites y avanzar hacia las zonas periféricas. Sus dificultades ponen de manifiesto las consecuencias de la heterogeneidad demográfica y social del país; más precisamente, en éstas últimas zonas el público de clases medias y altas potencialmente receptivo a sus propuestas tiene menores dimensiones relativas. Sin embargo, como lo han mostrado

Escolar (2001) y Calvo et al. (2001) el acceso al electorado que de todos modos está disponible ha sido neutralizado por el efecto mayoritario que, en conjunto, presenta el sistema electoral nacional.

A primera vista, esta es una conclusión inesperada por que la modalidad que regula la elección de diputados en el nivel nacional es el sistema proporcional. Sin embargo, como el comportamiento de este sistema depende del tamaño de los distritos electorales, sus efectos son distintos según sea el número de diputados que se elija en cada uno de ellos. En las provincias con más población y que, por consiguiente, eligen más diputados - Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal - el sistema proporcional funciona como tal, es decir, la distribución de bancas refleja muy de cerca la distribución de las preferencias de los electores. En cambio, en los distritos menos poblados y que eligen menos legisladores, el sistema electoral opera en términos mayoritarios, favoreciendo al partido que obtiene más votos. En esta última situación se encuentran doce provincias; en las ocho restantes los efectos son semi-mayoritarios. La tendencia a la hegemonía de un solo partido en un buen número de distritos se potencia, además, por el sistema mayoritario que rige, por un lado, para la elección de senadores nacionales y prevalece, por otro, en los regímenes electorales provinciales. En estas condiciones, la expansión de nuevas ofertas partidarias se vuelve más difícil debido a las barreras institucionales que en las zonas periféricas aseguran la reproducción de las fuerzas políticas de más largo arraigo.

A la luz de los problemas que hemos destacado parece aventurado anticipar el resultado de los intentos que buscan dar estructuración partidaria al voto de protesta de las elecciones del 2001. Ahora bien, si en el mejor de los casos los nuevos partidos ocupan el mismo lugar en el electorado que tenían sus predecesores, es probable que se asista a una re-equilibrio, pero no a una transformación del sistema de partidos (Abal Medina, (h): 2002). Por cierto, una relación más simétrica entre las fuerzas políticas no es un punto de llegada irrelevante para el proceso político en curso. Ocurre, empero, que el malestar con la representación y el clima de efervescencia social que rodearon el derrumbe del

gobierno de la Alianza y que acompañan a su sucesores abrieron hacia adelante el sendero ideal de una mutación más radical del perfil histórico de las ofertas partidarias.

Comparativamente, la peculiaridad argentina ha consistido en que los dos mayores partidos nacionales, PJ y UCR, distintos en cuanto a la composición social de sus adherentes (más estratos populares en el primero, sobre todo sectores medios en el segundo) tienen una escasa distancia ideológica entre sí y reúnen dentro de ellos un amplio arco de posturas desde la derecha a la izquierda. Las diferencias que los han separado y enfrentado a lo largo de la historia expresaron, más bien, el peso de sus respectivas subculturas políticas, gestadas y solidificadas en las coyunturas críticas que presidieron su constitución, las luchas cívicas por la libertad de sufragio en los radicales, el acceso de los trabajadores a los derechos sociales por obra de un liderazgo plebiscitario en los peronistas. La continuidad de la identificación partidaria en torno del PJ y la UCR descansó, precisamente, sobre esas subculturas políticas, que construyeron en el tiempo vínculos de lealtad y solidaridad por sobre las preferencias ideológicas individuales de sus adherentes. La erosión de esa densa amalgama, el aflojamiento de estos vínculos, tendrían, en consecuencia, la virtud de liberar a los adherentes de sus compromisos con vistas a organizar sus comportamientos más de acuerdo a las preferencias ideológicas.

Algo de esto es lo que ha venido sucediendo dentro del más antiguo de los dos partidos, la UCR. En este sentido, es sugestivo constatar que los promotores de las nuevas agrupaciones de centro-derecha y de centro-izquierda, López Murphy y Carrió, hayan salido de sus filas y lanzado sus iniciativas después de romper públicamente con el partido. La pérdida de competitividad de la UCR está induciendo, además, a la silenciosa diáspora de cuadros partidarios en busca de mejores oportunidades para continuar sus carreras políticas. La declinación del radicalismo como partido nacional, en beneficio de formaciones partidarias más ideológicamente homogéneas, está cancelando uno de los componentes de la peculiaridad del sistema de partidos argentino. ¿Qué decir del otro y más importante, el PJ? ¿Acaso estamos en la víspera de la ruptura de esta fuerza política, que engrosaría con sus poderosos fragmentos las alternativas hacia la derecha y hacia la izquierda del espectro electoral, como lo viene vaticinando Torcuato Di Tella hace años?

La oportunidad de esta pregunta no la dicta la existencia de un acelerado proceso de deserción de sus adherentes similar al que experimenta la UCR, según se desprende de la mayor permanencia de su electorado histórico. Ciertamente, los valores de la subcultura peronista han perdido la consistencia del pasado después de las políticas públicas de signo opuesto ejecutadas en su nombre durante el gobierno de Menem, pero aún conservan capacidad de suscitar lealtades y solidaridades. La pregunta acerca de la crisis eventual del partido la plantean los rasgos más originales que está adoptando la puja por el liderazgo entre dirigentes rivales. El conflicto por el poder dentro de la organización, recurrente en el peronismo, converge hoy con un conflicto de proyectos ideológicos, que está poniendo en tensión los mecanismos que han regulado hasta ahora las divisiones internas, evitando la ruptura. En el centro de la disputa está Menem con su propuesta hacia la derecha, en línea con los rumbos de sus diez años de gobierno, y sus rivales con la reivindicación más o menos actualizada de la tradición nacional-popular. Con los elementos disponibles la disputa tiene un final abierto. Un interrogante adicional sobre la suerte del PJ lo coloca la vasta movilización de desocupados que ha surgido y crecido en sus márgenes, pero que está radicada en el núcleo de sus bases electorales. De la resolución de la ecuación peronista depende que el perfil de las ofertas partidarias se despliegue más nítidamente a lo largo del eje derecha-izquierda.

Desde la perspectiva delineada por estas últimas consideraciones, la crisis de la representación partidaria adquiere una envergadura mayor y justifica preguntarse si no ha comenzado en Argentina la segunda transición. En 1983 se realizó la primera transición, en sintonía con la ola de democratización que recorrió a América Latina. En el país el fin del autoritarismo, además del restablecimiento del estado de derecho, significó la cancelación de largos años de antagonismos políticos irreconciliables y la creación de una democracia de partidos. Colocados en el centro de la vida política nacional, los partidos debieron de allí en más lidiar con los desafíos del gobierno de la emergencia y la mudanza de las instituciones económicas así como los de las mayores expectativas democráticas generadas por los cambios en la cultura política. Los límites y las dificultades que exhibieron para adaptarse a un escenario más complejo en cuanto a la

representación de intereses y de valores los condujeron a una situación de descrédito, que las elecciones de 2001 condensaron con elocuencia. Este momento crítico podría ser visto como el comienzo de la segunda transición⁶.

En la agenda de esta transición dentro de la democracia figuran las cuestiones que ha instalado con fuerza la crisis de la representación partidaria. Por un lado, están aquellas vinculadas con la reforma política y referidas a la revisión de los instrumentos de selección y fiscalización de los representantes por los ciudadanos. Por el otro, se trata de la recomposición del sistema de partidos. Unas y otras han sido sólo esbozadas y están lejos de haberse encarado. La resolución de estas cuestiones institucionales está condicionada, cabe finalmente agregar, a la respuesta que reciba la urgente necesidad de revertir el proceso que, en paralelo a los problemas de representación, ha pautado el último tramo de la democracia de partidos: la creciente desigualdad social y la falta de empleo, que están erosionando las precondiciones sociales del ejercicio de la ciudadanía de sectores cada vez más amplios de la población. La crisis económica de magnitudes inéditas en la que se encuentra el país y el cuadro actual de fragmentación política prometen tiempos difíciles para esta segunda transición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abal Medina (h), Juan Manuel (2002): Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos. En: Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina (comp.), *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era liberal*. Santa Fe.

Adrogué, Gerardo (1995): El nuevo sistema partidario argentino. En : Carlos H. Acuña (comp.), *La nueva matriz política argentina*, pp. 27-70, Buenos Aires.

Adrogué, Gerardo y Melchor Armesto (2001): Aún con vida. Los partidos políticos en la década del noventa. En: *Desarrollo Económico*, Vol.40, N° 160, pp. 619-652.

⁶ Usamos el término “segunda transición” siguiendo a Pasquino (2002) en su análisis de la democracia italiana.

Calvo, Ernesto et al. (2001): Las fuentes institucionales del gobierno dividido en la Argentina. En: Calvo, Ernesto y Juan Manuel Abal Medina (h), *El federalismo electoral argentino*, Buenos Aires.

Cheresky, Isidoro (2003): Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. Fluctuación del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de representación”, en I.Cheresky y J.M. Blanquer (comp.) *De la Ilusión Reformista al Descontento Ciudadano. Las elecciones en Argentina, 1999 y 2001*. Rosario, 2003, pp.19-51.

De Riz, Liliana y Gerardo Adrogué (1991): Democracia y elecciones en la Argentina: 1983-1989. En: Dieter Nohlen y Liliana De Riz, *Reforma institucional y cambio político*, pp. 237-295, Buenos Aires.

De Riz, Liliana (1998): From Menem to Menem. Elections and parties in Argentina. En: Joseph S. Tulchin and Allison M. Garland, *Argentina, the Challenges of Modernization*, Wilmington, pp. 133-152.

Escolar, Marcelo (2001): “Hacia una reforma del sistema electoral argentino: estimación y evaluación de las estrategias de delimitación, asignación geográfica de escaños, sesgos mayoritarios y sesgos partidarios alternativos”. *PNUD. Proy. ARG00/007*, Buenos Aires.

Escolar, Marcelo, Ernesto Calvo et al.(2002): Últimas imágenes antes del naufragio: las elecciones de 2001 en Argentina. En: *Desarrollo Económico*, Vol. 42, 165, abril-junio, pp.25-44

Gervasoni, Carlos (1998): El impacto de las reformas económicas en la coalición justicialista. En: *Boletín SAAP*, Año 4, N° 6, pp. 67-101.

Malamud, Andrés (2002): El escenario político se está modificando a medias. En: *Diario Clarín*, 21-09-2002.

Mercado Gasca, Lauro (1997): Una visita a la lealtad hacia los partidos políticos en América Latina. En: *Política y gobierno*, Vol. IV, N° 2, pp. 285-346. México.

Miranda, Diego (2002): Crisis de representación política en Argentina. En: *Revista SAAP*, Vol. 1, Año 1., Buenos Aires.

Mora y Araujo, Manuel (1991): El cuadro político y electoral argentino. En: Dieter Nohlen y Liliana De Riz, *Reforma institucional y cambio político*, pp. 207-235, Buenos Aires.

Mustapic, Ana M. (2002). Los sistemas de partidos en la Argentina. En: Klaus Bodemer, Andrea Pagni, Peter Waldman (ed), *Argentinien Heute. Politik, Wirtschaft, Kultur*. Frankfurt, 2002.

Novaro, Marcos, comp. (2002): *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*. Buenos Aires.

Palermo, Vicente (2002): El enemigo del pueblo. En: Marcos Novaro comp. (2002). *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*. Buenos Aires.

Pasquino, Gianfranco (2002): La experiencia italiana: dos transiciones (1943-48; 1989-2001). En: *PostData*, septiembre 2002. pp. 197-213.

Peruzzotti, Enrique (2002a): Towards a New Politics: Citizenship and Rights in Contemporary Argentina. En: *Citizenship Studies*, Vol. 6,1, pp. 77-93.

Peruzzotti, Enrique (2002b): Civic Engagement in Argentina. From the Human Rights Movement to the “Cacerolazos”. Mimeo.

Smulovitz, Catalina (1997): Ciudadanos, Derecho y política. En: *Agora*, 7, Buenos Aires.